

FEDERALISMO ELECTORAL: DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y DE LOS ORGANOS PUBLICOS LOCALES

“La democracia necesita una virtud:
la confianza. Sin su construcción,
no puede haber una auténtica democracia.”
Victoria Camps (1941-) Filósofa española.

Por: Lic Bernardo Cano Gonzalez y Mtro Hidalgo A Victoria Maldonado

Para garantizar la certeza en la renovación de los órganos de representación del Estado Mexicano, el derecho electoral regula la existencia, el funcionamiento y las atribuciones de las autoridades electorales en los ámbitos federal y local, siendo estas el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como a sus análogos a nivel local, las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Fiscalía Especializada para la atención de los delitos electorales, órgano que le pertenece a la procuraduría general de la República.

En la presente ponencia comentaremos las áreas de competencia que tiene el Instituto Nacional Electoral y los Órganos Locales Electorales, Instituciones que surgen como consecuencia de la reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, la cual rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE), con competencia entre otras de gran relevancia, como designar a los consejeros integrantes de los órganos superiores de dirección de los órganos públicos Locales, antes Institutos Electorales, en términos del artículo 41, fracción V, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a las Instituciones electorales de los Estados de la Federación se transformaron en Órganos Públicos Locales, de los cuales entre otras sus atribuciones Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos; Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos Independientes, en la entidad; Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda; Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral; Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales y municipales; Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo; Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la entidad de que se trate; Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto; Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral; todo esto con el fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral

En este proceso que siempre ha preocupado a nuestros legisladores de ir perfeccionando las atribuciones del órgano responsable de organizar las elecciones en nuestro país siempre de manera auténtica, en un entorno de paz y de forma periódica. En ese tenor, es importante clarificar las competencias de los órganos locales frente al órgano nacional, pues si viene si cierto que se crea un servicio profesional electoral nacional en la delimitación de funciones se presenta una pugna entre la competencia federal o nacional aduciendo razones centrípetas de carácter presupuestarias o técnicas y por otro la defensa de la soberanía de las entidades federativas esgrimida en defensa de los llamados OPLES, a quienes se requiere dotar de elementos de autonomía e independencia presupuestaria.

La idea central consiste en que nuestro sistema electoral nacional esté instrumentado con un marco normativo de avanzada que incluya la participación en forma directa de los ciudadanos en la posibilidad de formar parte de la estructura de mando en los poderes ejecutivos y legislativos; así como en los actos y acciones políticas trascendentales a través de la participación ciudadana, y que la organización de los procesos se realice de manera coordinada y no subordinada entre los niveles local y central de la autoridad administrativa electoral.